
El segundo Foro Social Mundial de Porto Alegre y los desafíos del movimiento social global contrahegemónico

José María Gómez*

Entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2002, Porto Alegre fue nuevamente palco del Foro Social Mundial (FSM). Así como el primero (I FSM), realizado el año anterior en la misma época, esta reedición (II FSM) constituye un acontecimiento político paradójico que condena de antemano al fracaso cualquier tentativa seria de “balance y perspectivas”, al tiempo que desencadena un ejercicio desenfundado de interrogación sobre su significado y alcance.

Desde luego, la inmediatez del fenómeno hace imposible un análisis metódico y profundo. A tan sólo dos meses de su realización, cualquier conclusión sería precipitada pues faltan numerosos relatos y material escrito sobre las actividades desarrolladas –base indispensable para cualquier evaluación cualitativa y realista– y mal se vislumbran los impactos efectivos del II FSM tanto hacia “adentro” como hacia “afuera” del movimiento social contra la globalización neoliberal. Sin embargo, la mayor limitación no es ésta, sino la que se desprende de la envergadura y de la propia naturaleza del Foro. En efecto, ¿cómo evaluar una experiencia que abarcó a más de cincuenta mil personas, con identidades, procedencias y perspectivas más variadas, participando de una extraordinaria multiplicidad de actividades, formales e informales? ¿Es posible disociar las características del evento de los rasgos distintivos del sujeto colectivo en estado naciente que le dio origen y que, simultáneamente, lo expresa y de él se alimenta? En otras palabras, ¿cómo ignorar que el FSM de Porto Alegre nace y depende de un “movi-

* Profesor del Instituto de Relações Internacionais de la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) y de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

miento de movimientos”, cuya heterogeneidad radical y dinámica descentralizada de acción torna tan imprevisibles como irreductibles los tiempos de procesamiento y las lecturas que suscita?

En la tentativa de interpretar la compleja relación entre sujeto colectivo, evento y contexto que hace del FSM un acontecimiento político de gran significación, estas notas se proponen plantea una serie de cuestiones y aspectos con el objetivo de avanzar en la comprensión de los dilemas y desafíos –o parte de ellos– que el movimiento social global enfrenta en el turbulento escenario de la política mundial actual. Para tal fin, se distinguen dos períodos contrastantes en su veloz trayectoria: el primero, de surgimiento y expansión constante, que se extiende desde Seattle, en noviembre de 1999, a Génova en julio de 2001; y el segundo, que se abre con los atentados terroristas del 11 de septiembre y se proyecta hasta hoy, en un contexto caracterizado por un conjunto de condiciones internacionales extremadamente adversas (guerra en Asia Central e implantación de un difuso dispositivo imperial de seguridad global “antiterrorismo”; cuadro de estancamiento y amenaza de riesgo sistémico de la economía mundial, con acentuada intensidad en el “centro del centro”; implementación continuada de políticas económicas de cuño neoliberal, no obstante los problemas crecientes de legitimación que el anuncio del “post-Consenso de Washington” intenta camuflar). El II FSM de Porto Alegre se inscribe entonces en este nuevo contexto, revelando no sólo las limitaciones y obstáculos del movimiento social global en formación, sino también su vitalidad y potencial transformador.

La nueva cartografía política del activismo transnacional

En poco más de un año, el mal llamado movimiento social “antiglobalización” modificó la escena política mundial con su abierta oposición tanto a las políticas y a las consecuencias sociales negativas de la globalización económica neoliberal como al rol decisivo que en ella desempeñan las principales instituciones y agencias internacionales. Plural y heterogéneo por definición (formado por viejos y nuevos movimientos sociales, ONGs, redes de acción cívica y colectivos políticos y sociales con las más diversas concepciones, intereses, señales de identidad y recursos organizacionales), de naturaleza eminentemente global (pues es en ese espacio, en sus tiempos y contradicciones, que los objetivos, las formas y los medios de lucha se construyen), el activismo transnacional emergente logró rediseñar la cartografía de la política contemporánea, tal como lo ilustran los nombres de las ciudades de Seattle, Porto Alegre y Génova, entre muchos otros, con los cuales pasó a ser identificado. Más importante aún, conquistó, de hecho, el reconocimiento político del propio *establishment* económico y político mundial, gracias a la repercusión y legitimidad social creciente de las manifestaciones de masa, conferencias o foros alternativos y campañas específicas que organiza (anulación de la deuda externa de los países pobres, supresión de los paraísos fiscales, introducción de la tasa Tobin, etc.)

Si bien la génesis del movimiento está ligada a complejos y entrelazados procesos históricos de transformación estructural del capitalismo, de la política y de la cultura desenvueltos durante las últimas cuatro décadas –transformación abordada con frecuencia bajo el controvertido término de globalización (Mittelman, 2000; Scholte, 2000; Held y MacGrew, 2000), su origen inmediato remonta a la segunda mitad de los años noventa, cuando se multiplican y se intensifican en diferentes partes del planeta protestas y actos de resistencia social a las políticas económicas dominantes de cuño neoliberal. Ello era resultado, por un lado, de la aplicación sistemática de dichas políticas durante más de una década en numerosos países del Norte, del Este y del Sur, en clara manifestación de la hegemonía alcanzada por ese ideario y por las fuerzas del bloque de poder imperial que la sustenta en la economía política global; y por otro, de la evidencia del abismo que separaba las promesas ufanistas de prosperidad, paz y desarrollo con que se pretendía legitimar la globalización económica, de la magnitud, extensión y profundidad efectiva de sus consecuencias e implicaciones negativas: concentración exponencial de riqueza y poder en y entre países y regiones, aumento de la desigualdad, polarización y exclusión social, crecimiento de la desocupación y de la precariedad del trabajo, crisis financieras recurrentes y bajas tasas de crecimiento económico, intensificación de la degradación ambiental, desvalorización de la ciudadanía social, fuerte disminución de la autonomía político-estatal (cuando no, en casos extremos, de desintegración estatal), multiplicación de guerras y conflictos bélicos, persistencia de prácticas proteccionistas y de subsidios de las grandes potencias, debilitamiento de la democracia liberal y de las formas partidarias de representación, erosión de culturas tradicionales, etc. Una evidencia que, además, exhibía el vínculo orgánico de las políticas neoliberales con las agencias económicas multilaterales, al asumir éstas últimas de manera ostensiva –sobre todo en la periferia y semi-periferia capitalista– la condición de vectores político-institucionales de “regulación de la desregulación”, presión y fiscalización de Estados y economías nacionales en sus respectivos dominios de actuación (el FMI y los planos de ajuste estructural, el Banco Mundial y los proyectos de desarrollo, la Organización Mundial del Comercio y el “constitucionalismo disciplinador” de la liberalización del comercio mundial).

Así, centenas de millones de personas diseminadas por el mundo experimentaban en la vida cotidiana los impactos de desestructuración y reestructuración del capitalismo global, combinando, entre otras características, la reorganización espacial de la producción y de las finanzas, el desmontaje persistente del Estado de Bienestar, la extrema fragmentación y degradación del mundo del trabajo, la disminución del poder de negociación de las organizaciones sindicales, la creciente contradicción entre las exigencias del capitalismo transnacional y las formas democrático-territoriales de gobierno, y un espíritu de hipercompetición en el que “el ganador se lleva todo”, en plena correspondencia con la dinámica desenfrenada de mercantilización de las esferas de la vida social. No sorprende, por

ende, que en esta nueva era de oro de las desigualdades, se asista al incremento de conflictos y resistencias sociales a la política de globalización neoliberal llevada adelante por los propios Estados, por las agencias económicas multilaterales y por las grandes corporaciones transnacionales.

Se sabe que la protesta de Seattle marca la fecha del nacimiento político del “movimiento de movimientos”. Las razones son conocidas: ocurrió en el corazón del imperio, movilizó un elevado número de participantes y obtuvo una victoria simbólica de peso –la suspensión de la Rodada del Milenio, convocada por la OMC, con la ayuda decisiva del acentuado conflicto de intereses interestatales en el seno de la Tríada y entre el Norte y el Sur. Claro que Seattle no surgió *ex nihilo*. De hecho, ello fue el momento culminante de un arduo proceso de convergencias progresivas y precarias entre numerosas redes, organizaciones, movimientos y movilizaciones, alimentadas tanto por las experiencias sectoriales de luchas pasadas cuanto por las nuevas iniciativas (campañas contra el NAFTA y contra el AMI, manifestaciones europeas contra el desempleo, primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad contra el Neoliberalismo convocado por el zapatismo, etc.) de contestación política abierta a la gobernanza global neoliberal y a su núcleo institucional visible (Aguillon, 2001a; Seoane y Taddei, 2001). De todos modos, es a partir del impulso cristizador de Seattle que se inaugura una fase acelerada de protestas, campañas y foros en diversas ciudades del mundo, demostrando, en un corto espacio de tiempo (el “largo año 2000”, que concluye con el primer FSM de Porto Alegre, y el “breve 2001”, que acaba con la movilización de Génova) (Antentas, 2002), la presencia política de un movimiento social en plena expansión.

La amplia capacidad de movilización social alcanzada (Québec y Génova son, en ese sentido, ejemplares) no sólo respondía a los *impasses* del liberalismo hiperglobalista, a la extensión de los impactos negativos de la globalización y a las inquietudes de la opinión pública de distintos países, sino también a las propias características del movimiento, reforzadas en la dinámica interna y externa de su proceso de constitución. En efecto, heterogéneo, global, no doctrinario, él conseguía, en alguna medida, establecer lazos con la opinión pública a través de la incorporación de temas y preocupaciones diversas en torno de dos ejes básicos: el rechazo a la transformación de todas las actividades humanas en mercadería, y la exigencia de democracia frente al poder fortalecido de los mercados (Khalifa, 2002). O sea, ofrecía una respuesta y una canalización participativa –que las formas tradicionales de la política territorial-nacional hacían cada vez menos posibles y efectivas– a las aspiraciones, incertidumbres y temores crecientes de ciudadanos “que querían comprender y actuar para controlar una globalización económica que se les escapaba” (Chavagneux, 2002). Por otro lado, tal como lo revelaban las movilizaciones organizadas en el Norte con motivo de las reuniones cumbres (G7, Unión Europea, FMI y Banco Mundial, etc.), las modalidades no convencionales de acción privilegiadas –entre ellas, la acción directa no violen-

ta— le daban una gran visibilidad política y mediática, al mismo tiempo en que indicaban el surgimiento de una nueva generación de activistas y la radicalización de una buena parte del movimiento (especialmente aquella orientada por un fuerte contenido anticapitalista, autogestionario y democrático de base que, mientras rechaza las grandes estructuras organizativas en beneficio de redes horizontales, produce sentido e identidad a través de la participación activa de las personas, combinando manifestaciones festivas y desobediencia civil) (Antentas, 2002).

Pero en esta fase de expansión el movimiento social global también se depa- raba con dificultades y limitaciones notorias. Sin duda el activismo transnacional era extremadamente minoritario; persistían los problemas de sobrerepresentación y subrepresentación de todo tipo (en términos de país, región, clase, religión, sexo, raza, etnia); las tensiones eran permanentes entre los niveles local, nacional y glo- bal de acción, como también entre la afirmación de identidades particulares de los distintos componentes y la necesidad de construir amplias alianzas y confluen- cias; había fuertes clivajes entre las formas organizativas sociales (de movimien- tos, ONGs y redes cívicas) y las formas político-partidarias o sindicales; en fin, existían profundas divergencias estratégicas respecto al horizonte de reforma o ruptura con el capitalismo global y su arquitectura institucional de poder. En su- ma, sin negar ciertos avances significativos (el mayor de los cuales tal vez haya sido la realización del I FSM de Porto Alegre en un país del Sur, con la finalidad explícita de erigirse en un lugar de encuentro que debatiese varias de las limita- ciones precedentes y la búsqueda de propuestas alternativas al orden neoliberal), el activismo transnacional emergente no lograba alterar el perfil prevaleciente de hombre blanco, del Norte, de clase media, cristiano y urbano (Sholte, 2001). Ade- más, permanecían abiertas cuestiones delicadas —que desde luego los adversarios no dejaban de enfatizar— al respecto, sea del grado de representatividad social, transparencia y democracia interna con que operan en el día a día los distintos componentes del movimiento, de los clivajes de intereses y visiones Norte-Sur, cuando no de la reproducción de desigualdades y jerarquías en el universo de las ONGs; finalmente, de las relaciones ambiguas que algunas ONGs y movimien- tos sociales particulares mantienen con firmas multinacionales, Estados e institu- ciones internacionales, fruto de juegos nada inocentes de cooptación y recupera- ción mediática (ya que contactos con la sociedad civil, no sólo legitiman sino que también son *good for bussiness*) (Edwards, 2001).

La radicalización democrática del espacio global y la tentativa imperial de criminalización

Al movilizarse en nombre de las exigencias normativas de justicia y democra- cia en el mundo contra las fuerzas, instituciones y símbolos del orden neoliberal (“otro mundo es posible”, había proclamado el I FSM de Porto Alegre), esta cons- telación de movimientos y organizaciones sociales —operando como “coalición de

coaliciones” en y a través de numerosos países y regiones– asumía un carácter abiertamente contrahegemónico. Podría decirse que, frente a la globalización “por arriba” conducida por el bloque de poder imperial, se configuraba una globalización “por abajo” como embrión de un contrapoder, pese a la brutal asimetría de la correlación de fuerzas existentes. Inclusive no faltan interpretaciones que le atribuyan un potencial de transformación democrática radical del orden mundial vigente –la ascensión de un “nuevo multilateralismo”, capaz de reconstruir sociedades civiles y autoridades políticas en escala global, en sistemas de gobernanza “de abajo hacia arriba” y de organización post-hegemónica con relación al capital, a los Estados, al patriarcalismo y demás estructuras de dominación (Cox, 1999). De todos modos, sea cual sea el horizonte de lo posible, lo cierto es que el movimiento está orientado por propósitos emancipatorios amplios que lo llevan a identificarse con las más diversas luchas de pueblos, clases, grupos y sectores subalternos contra el orden hegemónico mundial. Un orden que resulta de un complejo y nebuloso bloque de poder imperial, formal e informal, público y privado, cuyo núcleo duro, cimentado por la ideología neoliberal, está constituido por el capital transnacional, por los Estados centrales –bajo la supremacía de la superpotencia norteamericana– y por las instituciones internacionales financieras, de desarrollo y de seguridad (Cox, 1999).

Pero más allá de las características, limitaciones y potencial del movimiento social transnacional en esa fase ascendente, se impone la pregunta sobre el alcance efectivo de la acción contestataria. En ese sentido, cabe señalar que, aparte de algunas “victorias” precarias o meramente simbólicas –la disminución de la deuda externa de los países más pobres, la retirada de la multinacional Monsanto de su famosa semilla no reutilizable Terminator, la suspensión de la Rodada del Milenio en Seattle (fácilmente revertida, por lo demás, con la recuperación plena del discurso de liberalización del comercio mundial en la última reunión de la OMC, en Doha, en noviembre pasado), poco se consiguió avanzar en las transformaciones exigidas, como lo demuestran de manera inequívoca los análisis de contenido y forma de las políticas implementadas por las agencias económicas multilaterales (O’Brien et al, 2001). A su vez, fueron esos pocos resultados, junto con el giro más represivo e ideológico que comenzaron a dar, respectivamente, los gobiernos y las instituciones internacionales, los que estimularon la radicalización del movimiento, con impactos en los movimientos sectoriales y en las ONGs más moderadas.

Entre tanto, el apoyo y el reconocimiento de la legitimidad del movimiento social global por parte de amplios segmentos de la opinión pública de diferentes países abrían una profunda brecha en el consenso hegemónico neoliberal de la mercantilización desenfrenada, del ajuste estructural permanente y de la “buena gobernanza”. Y era a través de esa brecha que se creaban las bases iniciales para desencadenar el debate político sobre el contenido, la forma y las consecuencias de la política de globalización dominante, mientras ganaban impulso los esfuer-

zos de construcción de amplias alianzas y convergencias, estrategias alternativas viables y el esbozo de un núcleo normativo de “otra” globalización, con justicia social, democracia y seguridad humana (Gómez, 2001).

Aunque en términos de poder real su capacidad contrahegemónica fuese mínima y precaria, parecía innegable que movimientos sociales y ONGs internacionales –y con ellos, el “movimiento de movimientos”– irrumpían en la escena internacional con el firme propósito de permanecer en ella, obligando a altos funcionarios de las instituciones internacionales, gobiernos de numerosos países y corporaciones transnacionales a tomar más en cuenta sus presiones, denuncias, informes y movilizaciones en los más variados dominios (del medio ambiente a los derechos humanos, pasando por la contestación del propio orden global), en nombre de valores altamente consensuales, y muchas veces como portavoces de poblaciones, categorías o grupos sociales privados de cualquier recurso político. Así, tales actores noestatales contribuían decisivamente para forjar un espacio público supraterritorial, en el cual una embrionaria sociedad civil global promovía un debate democrático sobre “el estado del mundo”, con claras funciones político-educativas de información, reflexión y acción, sobre cuestiones y condiciones cruciales de vida y de trabajo destinadas al mayor número posible de personas (Scholte, 2001).

Como era de esperar, la reacción del bloque de poder imperial frente al único vector que avanzaba y crecía con perspectivas, propuestas y prácticas de democratización de las relaciones de poder en escala mundial, no demoró en llegar. Primero se asistió a la tentativa retórica de reconocer –por medio del discurso sistemático de las agencias multilaterales y de diversas personalidades de la política y de la comunidad de negocios de los países centrales– la necesidad de “humanizar” la globalización económica y de corregir sus desvíos sociales, ambientales y de desarrollo. En esto había incidido el nuevo clima ideológico abierto por la onda de crisis financieras globales que entre 1997 y 1999 afectó a los países llamados “emergentes”, y que se manifestaba sea a través de las críticas –incluso en el seno del propio *establishment*– al rol de FMI frente a tales situaciones, sea a través de influyentes argumentos señalando la conveniencia de atenuar las políticas ultraliberales y recuperar funciones más activas del Estado en la economía (Stiglitz, 2002; Soros, 2000). Pero la respuesta más dura vino bajo la forma de una escalada tendiente a criminalizar, denigrar, dividir y aislar al movimiento de oposición a la globalización neoliberal, justamente en el momento en que este último crecía en capacidad de movilización, y en que sus reivindicaciones y manifestaciones provocaban un fuerte impacto en amplios sectores de las sociedades civiles nacionales (George, 2001).

La protesta de Génova marcó, sin duda, el punto culminante de esa estrategia antimovilizadora y represiva, a pesar de que varios de sus elementos ya estuviesen presentes en Washington, Praga y Niza, en el año 2000 y, sobre todo, en Davos, Québec y Goteborg, en 2001. Implementada por el gobierno Berlusconi, que

para ello contó con el complaciente silencio de los dirigentes del G-8 allí reunidos, el saldo es conocido: un muerto, centenas de heridos, la destrucción del centro de comunicaciones alternativas, detenciones abusivas y humillaciones diversas cometidas por la policía, la retención de activistas extranjeros en la frontera italiana, como también la atribución de responsabilidad jurídica criminal por actos de violencia a los organizadores del Foro Social de Génova. O sea, en vez de proteger una manifestación de casi doscientas mil personas y centenas de organizaciones ejerciendo los derechos democráticos de reunirse y expresar públicamente su oposición bajo formas no violentas de desobediencia civil, tal manifestación fue criminalizada y reprimida a través de una confrontación agresiva generalizada, como si esa multitud pacífica pudiese ser confundida con los minúsculos grupos violentos del *black bloc* o con simples provocadores (Dela Porta y Tarrow, 2001). Además, se proseguía con la contraofensiva ideológica iniciada luego de Seattle por autoridades nacionales e internacionales, comunidad de negocios, medios especializados y *think tanks* conservadores, con el objetivo de descalificar la imagen pública de los activistas transnacionales (“indeseables”, “vándalos genéticamente violentos”, “antimodernos”, “enemigos de los pobres”, falta de representatividad de los movimientos y organizaciones, etc.) (Petrella, 2001; George, 2001). Por último, con el objetivo de neutralizar el movimiento social global, se reafirmaba más que nunca, después de los sucesos de Génova, la política del aislamiento, esto es, evitar la convocación de grandes reuniones internacionales en ciudades que podrían servir de palco para las protestas antiglobalización liberal, tal como lo ilustraban las decisiones de realizar la conferencia de la OMC en Qatar o la reunión cumbre del G-8 de este año en un lugar montañoso de difícil acceso, en Canadá.

A pesar de que la brutalidad represiva y las provocaciones policiales tuvieron un efecto contrario al esperado en la opinión pública italiana y europea (pues suscitaron la condena de la violencia policial y una mayor legitimidad de las exigencias sociales, ambientales y democráticas planteadas), lo ocurrido en Génova puso al movimiento frente a serios dilemas respecto a la forma y a la eficacia de la acción hasta entonces privilegiada. A partir de ese momento, la gran cuestión pasó a ser cómo garantizar la unidad y el carácter pacífico de las manifestaciones –base fáctica y normativa de la convergencia horizontal de diversos movimientos y organizaciones asociativas, sindicales, ambientalistas, religiosas, etc.– ante la escalada represiva y de criminalización de los Estados, cuyo objetivo era intimidar, dividir y deslegitimar el movimiento frente a la opinión pública. Más aún cuando la recusación y la condena a la violencia (tanto la de los Estados como la de los grupos ultraminoritarios que se obstinaban en hacer el juego del adversario) no implicaba desistir de la radicalidad de formas de acción y de lucha, dados los escasos resultados alcanzados hasta entonces. Fue en medio de ese proceso que, literalmente, cayeron del cielo los atentados terroristas del 11 de septiembre.

El 11 de septiembre y la “nueva guerra” del Leviatán imperial contra el terrorismo global

El drástico cambio del contexto internacional provocado por los atentados terroristas en Nueva York y Washington abrió una fase política más compleja y adversa en la trayectoria del movimiento social global contrahegemónico, obligándolo a redefinir la agenda de movilización y a enfrentar diversos dilemas e *impasses* ya presentes en los momentos finales de la fase ascendente anterior (Seattle-Génova). Para comprender los desafíos impuestos por el nuevo contexto, conviene detenerse en algunos rasgos distintivos de éste último (Gómez, 2002).

El punto de partida es el reconocimiento de la magnitud y de la gravedad excepcional de los dos hechos entrelazados que están en el origen de la crisis internacional. En primer lugar, los atentados revelaron que la única superpotencia existente fue atacada en el propio territorio por una red terrorista transnacional (y no por un Estado), mediante aviones comerciales de compañías norteamericanas (y no a través de medios militares convencionales externos) que estrellaron contra los edificios que simbolizan su poder financiero y militar, provocando destrucción material y miles de víctimas civiles. O sea, la aplastante supremacía militar de la superpotencia resultó impotente frente a la nueva arma mortífera utilizada por un actor noestatal que, con eficacia organizacional y motivación ideológico-religiosa capaz de justificar la inmolación y el asesinato de inocentes, busca propagar su mensaje político a través del efecto simbólico y mediático de la acción terrorista. En segundo lugar, Estados Unidos, inicialmente en estado de choque debido a la pérdida de la pretensión de invulnerabilidad territorial (que durante años pensaban haber alcanzado) y a la consecuente generalización de la inseguridad y del miedo en la población, reaccionaron de forma maciza. En efecto, herido en su orgullo nacional, pero con todos los mega-dispositivos de poder intactos, el *hegemon* declaró, unilateralmente, en nombre “del Bien contra el Mal”, una guerra global sin precedentes contra las redes terroristas y los Estados que les servían de santuario y protección. En la primera etapa de la larga guerra anunciada, el blanco elegido fue Afganistán, con los objetivos declarados de derrocar el régimen de los talibanes, cazar a Osama Bin Laden –“vivo o muerto”– y eliminar la organización terrorista Al Qaeda, como supuestos responsables por los atentados.

Siete meses después de los atentados y de la consiguiente respuesta militar punitiva, la percepción de la situación internacional que prevalece es que está cada vez más prisionera de la lógica y del discurso de la “nueva guerra global” y del terror del “enemigo invisible”, los cuales, en estrecha vinculación y fortalecimiento mutuo, parecen alimentar hasta el paroxismo la reproducción del binomio violencia-seguridad, con implicaciones graves y duraderas sobre los más variados ámbitos, actores y cuestiones de la política mundial.

La acción militar contra Afganistán y la campaña global antiterror significaron la vuelta plena del intervencionismo norteamericano bajo la forma reforzada

de un unilateralismo hegemónico imperial, pasando por encima de instancias multilaterales, tratados y leyes internacionales. Al levantar la terrible amenaza de destrucción, con base en la afirmación de que “quien no está con nosotros está con los terroristas”, mientras se dejaba de lado a las Naciones Unidas y a la OTAN (a diferencia de lo que había ocurrido en la guerra del Golfo y en la de Kosovo), no le resultó difícil a Estados Unidos obtener el reconocimiento del derecho de autodefensa y la solidaridad por parte de la casi totalidad de los Estados existentes, de la OTAN y de las propias Naciones Unidas, así como un alineamiento generalizado en la lucha contra el terrorismo global, incluyendo a Rusia y China. De hecho, esa lucha se tornó el elemento central de un dispositivo de seguridad global que sólo puede aspirar a un mínimo de eficacia si funciona con la cooperación de todos los Estados. Pero Estados Unidos, en la condición de superpotencia golpeada y desafiada, al reservarse el derecho exclusivo de conducir las acciones y definir los objetivos, los medios y el enemigo esquivo, hace que tal dispositivo responda a una lógica imperial de represión, control y orden que no reconoce más límites espaciales y temporales. Una lógica imperial, por lo demás, que, de manera más difusa y menos unilateral, ya operaba de manera ostensiva en los años noventa a través del desarrollo de dispositivos supraterritoriales de carácter jurídico, político-institucional e ideológico, en el cuadro de la economía política global dominante y en beneficio del bloque de poder mundial (Estados centrales bajo el incontestable liderazgo norteamericano, capital productivo y financiero transnacional, instituciones económicas y de seguridad internacionales, ideología neoliberal).

La guerra contra Afganistán se inscribe en esa lógica imperial unilateral. Combinando política de escarmiento y reposicionamiento –inclusive militar– en Asia Central, está motivada por razones estratégicas y económicas (fundamentalmente el acceso y la exploración de petróleo y gas en la cuenca del Mar Caspio, de importancia vital durante las próximas décadas). Sin embargo, dada la situación explosiva de la región, la estrategia escogida no hace sino aumentar el riesgo de que la doble tarea fijada se convierta, a mediano y largo plazo, en un proceso multiplicador de todo tipo de violencia, con proyecciones imprevisibles e incontrolables para el resto del planeta. Basta recordar la extrema complejidad y la extensión de múltiples conflictos (Israel-Palestina, Cachemira, Chechenia, Irak, Kurdistán, Tajikistán, etc.) y asuntos (geopolíticos, étnicos, nacionales, religiosos, droga, terrorismo, petróleo, refugiados) que históricamente han contado con la interferencia activa, la complicidad o la indiferencia de las potencias occidentales. Desde luego, para Estados Unidos no era un objetivo secundario derrumbar el régimen de los talibanes y capturar a Bin Laden y los principales dirigentes de Al Qaeda. Su sociedad, tomada por un creciente sentimiento de miedo, patriotismo y deseo de venganza, así lo reclamaba. Su gobierno también, aunque por otros motivos adicionales: arrastrando problemas de legitimidad de origen y enfrentando una grave recesión económica, apostó en una demostración de fuerzas sobre

un blanco relativamente fácil –un país devastado y pobre, que contaba con un “casi-Estado” y uno de los regímenes más aislados, retrógrados y desacreditados del mundo–, a los fines de recomponerse de la “derrota simbólica” infligida por los perpetradores de los atentados, encontrar una poderosa disculpa para la crisis económica, y justificar tanto el haber retornado de los gastos militares y de inteligencia como el avance de los controles de seguridad sobre las libertades civiles de ciudadanos y de extranjeros.

Salta a la vista que no es con una acción de ese tipo que podrá ser erradicado o combatido con eficacia el terrorismo islámico (aunque Al Qaeda sufra duros golpes y Bin Laden pueda algún día ser capturado o muerto), o cualquier otro que aparezca. Por un lado se trata de un terrorismo inédito, de naturaleza global, no dependiente de ningún Estado, que se desplaza y se recompone con extrema facilidad. Es decir, un terrorismo transnacionalizado en objetivo político, reclutamiento y afirmación de identidad –la comunidad musulmana dispersa a lo largo de cinco continentes, que no dispone de una base popular territorializada, opera sin estructuras fijas y verticales de comando, cuenta con logística y financiamiento propio o privado, puede tener acceso a medios de destrucción de masas y consigue un aprovechamiento integral de los procesos tecnológicos, financieros, organizaciones y mediáticos abiertos por la globalización en curso (Rouleau, 2001).

Por otro lado, si la lucha contra el terrorismo y sus Estados protectores se limita a una guerra cuyo objetivo declarado consiste en castigar, pocas dudas caben de que generará efectos contraproducentes, profundizando el miedo y el odio tanto en los países árabes e islámicos como en los occidentales. De hecho, los bombardeos, las víctimas inocentes y la presencia de tropas norteamericanas y aliadas, tal como ocurrió en la Guerra del Golfo, reforzarán motivaciones y atraerán nuevos reclutamientos para las redes terroristas, además de tornar plausible, en amplios sectores de la población de dichos países, su mensaje de “guerra santa” contra las “cruzadas infieles” que oprimen a la comunidad musulmana. Algo que será intensificado si se confirman las señales de la Casa Blanca y del Pentágono de que la campaña militar se extenderá a otros países –el llamado “eje del mal”, con Irak al frente de la lista. Todo parece indicar, entonces, que la guerra de venganza es una trampa (Fisk, 2001). Y una trampa peligrosa para las potencias occidentales, pues, sin poder eliminar por completo su vulnerabilidad ante un enemigo de esa naturaleza, ellas sucumben a un discurso y a una conducta de guerra ineficaz y más mortífera que el propio terrorismo, cuyas consecuencias perversas hoy son visibles: amenaza a los valores que se pretende defender, profundiza el racismo y la xenofobia, justifica una escalada de poder represivo y de control que mina los derechos humanos y las libertades democráticas.

Combatir el terrorismo global con mayor eficacia sin caer en la trampa de la estrategia del miedo y del odio requiere, al contrario, una postura completamente diferente. Una postura que no debería basarse en la guerra sino en el compromiso intransigente con el sistema de derecho, de modo de evitar la indiferencia-

ción entre la lucha antiterrorista y la terrorista (o la existencia y reproducción de dos terrorismos con frecuencia vinculados: el estatal y el privado). En otras palabras, privilegiar en el ámbito internacional un método de acción jurídico-policial –y, excepcionalmente, también militar– para detener sospechosos y dismantelar redes terroristas, destinado a proteger a los civiles “de todos los credos y nacionalidades, sea donde sea que vivan”, y a capturar a los criminales para que sean juzgados delante de un tribunal internacional, acatando “escrupulosamente tanto las leyes de la guerra como las de los derechos humanos” (Held y Kaldor, 2001). Entretanto, siendo el terrorismo un crimen político, ese método también estaría condenado al fracaso si las cuestiones políticas que lo motivan y lo alimentan no fueran atacadas a la raíz, a través de un efectivo plano de acción política de corto, medio y largo plazo, que aisle y deslegitime el mensaje y la acción de las redes terroristas. Lo cual implica avanzar en la justa solución de la cuestión palestina, el cambio de las políticas dominantes en el Golfo Pérsico y en Asia Central, y una profunda transformación de las estructuras globales de desigualdad económica, discriminación cultural y concentración de poder y riqueza. No sorprende, por lo tanto, que una postura de esa índole no esté presente en la agenda política internacional actual ni que ella pueda ser incorporada por la simple fuerza del argumento. En rigor, sólo un poderoso movimiento social transnacional podría tomarla como bandera de lucha, un movimiento que, orientado por cuestiones ético-políticas globales, se esfuerce en encauzar el debate político en dicha dirección, presionando a los principales Estados e instituciones internacionales a posicionarse al respecto.

Junto con la ofensiva militar en Afganistán, Estados Unidos impulsó la implantación de un dispositivo de seguridad global antiterrorismo que pasó a adoptar el lenguaje figurado de la “nueva guerra global”, multiforme, sin fronteras y permanente. Ello revelaba que los veteranos “halcones” que la conducen combinaron la persistencia del viejo espíritu de la Guerra Fría con una cierta conciencia de la envergadura de las transformaciones que pretenden promover. Al final de cuentas, después de una década, se había abierto la posibilidad concreta de sustituir el comunismo por un nuevo enemigo, difuso, “invisible”, y con capacidad de atacar de sorpresa en cualquier tiempo y lugar. En ese sentido, resulta ocioso enfatizar la funcionalidad de tal enemigo para estrategias imperiales de dominio y de control en el espacio global. Con un elemento agravante: al basar la campaña antiterror en la premisa de que “quien está con ellos está contra nosotros” y, al mismo tiempo, atribuirse el derecho exclusivo de definir el terrorismo en términos reconocidamente ambiguos y amplios (capaces de abarcar desde grupos insurgentes y movimientos de oposición política hasta organizaciones criminales), el peligro concreto que se corre es de que Estados Unidos lleve adelante, con total autonomía, guerras e intervenciones militares sin límites y sin fin, no respetando leyes internacionales ni instancias multilaterales (Cepik, 2001).

Pero junto a ese peligro, existe otro no menos grave que avanza del plano doméstico norteamericano hacia el plano internacional, de la mano de una serie de medidas y modificaciones legislativas aprobadas o que se pretende aprobar en nombre de la lucha contra el terrorismo. No se trata, por cierto, de la pertinencia de decisiones específicas tendientes a reforzar la capacidad de investigación y coordinación policial y judicial, quiebra de sigilo bancario y congelamiento de fondos financieros, o a aumentar los controles de seguridad en lugares claves (aeropuertos, fronteras, represas, usinas nucleares, etc.), sino del conjunto de dispositivos que atribuye poderes represivos y de control sin precedentes a organismos de inteligencia y seguridad, cuya sanción y ejercicio implican un ataque directo al sistema de derecho fundado en el imperio de la ley, a determinados derechos de ciudadanía democrática y al propio régimen internacional de derechos humanos.

En efecto, en plena marea patriótica, el gobierno de Bush logró aprobar por el Congreso un paquete de leyes antiterrorismo que endurece penas y extiende poderes de policía, estableciendo limitaciones generales al derecho a la privacidad y al de defensa (escuchas telefónicas y rastreo arbitrario de comunicaciones por Internet, detención incommunicable de extranjeros sospechosos, etc.), pero que se aplican con todo rigor a inmigrantes, legales y clandestinos. Más inquietantes aún son las medidas excepcionales tomadas por el gobierno, sin necesidad de aprobación por el Congreso: los interrogatorios “voluntarios” de residentes de origen árabe, la supresión del secreto entre detenidos y abogados, la prisión por tiempo indeterminado de centenas de personas, planos de vigilancia de grupos religiosos y políticos, y, la más grave de todas, la instauración de tribunales militares para juzgar extranjeros sospechosos de terrorismo. A través de tales tribunales, lo que el presidente de Estados Unidos ha obtenido, de hecho, es “el poder dictatorial de encarcelar o ejecutar extranjeros” (Safire, *El País*, 16/11/2001), dentro y fuera del territorio norteamericano, con la simple alegación de que tiene “motivos para creer” que son miembros de una organización terrorista. Es decir, el poder de determinar quién y dónde juzgar, mediante procesos sumarios, a puertas cerradas, con jurados militares que, sin reglas de procedimiento fijas, con un nivel flexible de pruebas y con abogados no escogidos por los acusados, pueden dictar penas de muerte sin posibilidad de revisión por parte de los tribunales civiles (ídem).

Esas medidas significan la más completa negación de la igualdad ante la ley y de la separación de los poderes, pilares del Estado de Derecho. Asimismo, como bien señala Boaventura de Souza Santos, ellas materializan un corte brutal entre derechos de ciudadanía territorial (exclusivos para aquellos que el Estado norteamericano reconoce como ciudadanos) y derechos humanos supraterritoriales (reconocidos a cualquier ser humano, independientemente de diferencias de nacionalidad, clase, sexo, raza y religión). Razón por la cual representan un grave retroceso en materia de institucionalización y eficacia del régimen internacional de derechos humanos, tan arduamente construido a lo largo de medio siglo, y que, según algunas interpretaciones, aunque embrionario, problemático e incompleto,

se ha erigido en un vector fundamental del proceso de construcción de una ciudadanía global o cosmopolita (Gómez, 2000). De todos modos, a pesar de las protestas y críticas dentro y fuera de Estados Unidos, los sondeos muestran que la mayoría de la opinión pública norteamericana apoya al gobierno, en ostensiva manifestación de debilitamiento de las energías cívicas e institucionales de una sociedad que se pretende democrática, indicando la existencia de riesgos reales de involución autoritaria. No muy diferente, por lo demás, de lo que está ocurriendo en Europa, hoy envuelta en una inquietante ola de discursos y avances electorales de fuerzas políticas que levantan la explosiva combinación de nacionalismo, xenofobia y racismo.

En suma, en torno de las medidas antiterroristas que se irradian desde Estados Unidos hacia el resto del mundo, parece estar configurándose una especie de *Leviatán imperial*, que procura resolver de manera represiva y con control social creciente el clásico dilema del orden político entre seguridad y vigilancia versus libertades civiles y política democrática. Así, la irrupción de este dispositivo global de seguridad en un contexto de la política mundial que antes de los atentados del 11 de septiembre se caracterizaba tanto por la multiplicación de luchas y conflictos sociales en distintos países y regiones como por la expansión vertiginosa de un movimiento social transnacional de contestación abierta al ordenamiento económico-político global neoliberal, no puede dejar de tener graves implicaciones y consecuencias. Basta imaginar la posibilidad de su criminalización a través de la simple clasificación de “terroristas”, una clasificación cuyo uso circunstancial –tal como muchos Estados lo demostraron hasta el hartazgo durante el siglo XX, cuando se trataba de reprimir a determinados opositores internos– ahora puede encontrar apoyo en una definición esencialmente ambigua y unificada de alcance mundial.

El FSM de Porto Alegre en tiempos sombríos: entre promesas y desafíos del movimiento social global contrahegemónico

Los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono tuvieron, inicialmente, un impacto político tremendo en el “movimiento de movimientos”: hacia adentro, parálisis y perplejidad; hacia afuera, un agitado debate sobre su futuro inmediato. Es verdad que no faltaron insinuaciones o explicitaciones –a la Berlusconi– que asimilaban o establecían un sórdido paralelismo entre las redes terroristas islámicas y el movimiento social global contrahegemónico. Al final, ambos comparten el mismo enemigo y, por lo tanto, las luchas respectivas son, aunque con métodos diferentes, contra los mismos símbolos dominantes del orden mundial: el capital financiero transnacional y la fuerza militar de la superpotencia. Pero la mala fe del argumento es gritante porque todo lo opone (Aguiton, 2001b). El terrorismo global islámico, o cualquier otro que por ventura pudiera surgir, significan la más completa negación del movimiento social antiglobalización libe-

ral. De hecho, el terrorismo en general (imperial, estatal o privado), y, en particular, aquel que fue responsable por los atentados del 11 de septiembre, es absolutamente incompatible con la práctica, la concepción y los objetivos que orientan al movimiento social, el cual rechaza y condena la violencia apoyado en razones morales y políticas indisociables. En otras palabras, en cuanto el primero expresa un grupo secreto de alucinados cultivadores de la muerte (que, lejos de emancipar los “desheredados de la tierra”, busca propagar su mensaje político-religioso de salvación, homogeneización e intolerancia a todo lo que sea diferente en el mundo, a través del asesinato planeado de inocentes), el movimiento social transnacional es el único sujeto de transformación orientado hacia la búsqueda de alternativas globales al orden mundial neoliberal que no cae en retrocesos nacionalistas, fundamentalistas o reaccionarios (Aguítón, 2001b). Y lo hace en la condición de sujeto plural y heterogéneo por definición, que rehabilita la política como práctica colectiva de lucha basada en la deliberación y participación democrática, en el compromiso con los derechos humanos, en el diálogo intercultural y en la solidaridad con los pueblos, abrazando utopías de emancipaciones sociales de igualdad y diferencia (o de igualdades que no descaractericen y de diferencias que no discriminen negativamente) (Boaventura de Souza Santos, 2001).

En rigor, no hay nada de antiimperial, en el sentido pleno del término, en los atentados cometidos. No sólo porque quienes supuestamente los perpetraron fueron, desde el punto de vista financiero y militar, criaturas e instrumentos directos de la política imperial en los tramos finales de la Guerra Fría, sino porque la existencia del “enemigo invisible” funciona como la justificación perfecta de la “nueva guerra” (y de las guerras reales, como la de Afganistán o de otras que vendrán) que el bloque de poder imperial se propone desencadenar mediante el dispositivo de seguridad y control global, con restricciones a los derechos humanos y a las libertades democráticas, multiplicando racismo y xenofobia. En definitiva, el terrorismo no hace más que reforzar la dominación imperial, pues promueve gastos e invenciones militares de nuevo tipo junto a la corrida armamentista, no aumenta la confianza de los pueblos, clases o grupos oprimidos en su propia fuerza de emancipación, y acentúa o introduce los gérmenes de la división y polarización (patriotas vs. antipatriotas; antinorteamericanos vs. antiimperio, radicales vs. moderados, etc.) en el seno del propio movimiento contra la globalización capitalista, en pleno crecimiento durante la fase Seattle-Génova (Bensaïd y Pelletier, *Le Monde*, 30/11/2001). Más grave aún, puede llevar al paroxismo la lógica del biopoder como control y vigilancia de los cuerpos (Hardt y Negri, 2000) ante un enemigo esquivo y casi indescifrable, sin dejar de fortalecer la tendencia a la criminalización, tanto con relación a los disidentes u opositores internos, clasificados de “terroristas” por los Estados, como a los activistas transnacionales, opositores del orden global liberal, que participan de protestas, foros y campañas en distintas partes del mundo (Della Porta y Tarrow, 2001).

Hay quien sustenta que el dispositivo de seguridad global antiterrorismo no tiene vínculos (y no debe ser vinculado) con la globalización económica neoliberal, ya que ambos remiten a problemas y soluciones completamente separados, aunque los combates que suscitan se desarrollan en el ámbito global: el primero viene de la mano armada de los Estados y, dado que el terrorismo islámico es un enemigo común a todos, sería como mínimo hipócrita no apoyar la ofensiva militar norteamericana en Afganistán; el segundo, al contrario, es impulsado por los movimientos sociales y políticos que tienen como objetivo poner fin al dominio destructivo de la lógica financiera y restaurar la autonomía de lo político sobre lo económico (Touraine, 2001). Otros afirman que la irrupción del terror global acaba con las veleidades de salvación del neoliberalismo y anuncian la primacía de la política y el retorno al poder de los Estados, ya sea en la forma cooperativa (Beck, 2001), o en la forma hiperrealista de potencia y búsqueda del interés nacional (Kissinger, 2002). Otros van aún más lejos y afirman la irreversibilidad de la globalización económica liberal –aunque atenuando los desvaríos ortodoxos neoliberales, en razón de la vuelta de los Estados para enfrentar las dificultades de seguridad y recesión económica–, previendo la declinación o desaparición futura del movimiento social global contrahegemónico (Giddens y Dahrendorf, 2001). Sin embargo, frente a todos esos argumentos, cabría recordar: primero, que no pueden volver los que nunca se habían ido, o sea, los Estados, quienes, juntamente con las instituciones internacionales y el capital transnacional fueron y son los grandes responsables en llevar a cabo la política de globalización neoliberal; segundo, que los procesos de globalización (ambivalentes y siempre atravesados por las relaciones de poder) no se identifican ni se agotan en la forma dominante neoliberal (Scholte, 2000); y finalmente, que la configuración del dispositivo global de seguridad antiterrorista en curso se presenta como la contrapartida necesaria de la continuidad (a raíz de los cambios y de la crisis de legitimidad evidentes) de la política económica global neoliberal. En ese sentido, nada más indicado que mirar hacia el “nuevo liberalismo intervencionista” post atentados del gobierno de Bush (disminución de impuestos para las grandes corporaciones y ricos en general, subvenciones a las compañías aéreas, contratos millonarios con la industria bélica y de inteligencia, etc.) (Frémeaux, 2001). O, mejor aún, acompañar los resultados poco alentadores (a no ser la pequeña concesión hecha a la producción de remedios genéricos para combatir determinadas pandemias en países del Sur) de las negociaciones de la última reunión de la OMC, donde no sólo brilló por su ausencia la cuestión de los impactos sociales y ecológicos del comercio mundial, sino que se reafirmó la necesidad de acelerar y extender la liberalización de los intercambios y de las inversiones (Cassen y Clairmont, 2001). Las enfáticas palabras del representante especial norteamericano para el comercio internacional, Robert Zoellick, son claras: “Nuestra estrategia contra el terrorismo debe reconocer la relación entre seguridad y economía. Al promover la agenda de la OMC y, principalmente, una nueva negociación para liberar el comercio global, esas 142 naciones pueden contener la repulsiva destrucción con-

tenida en el terrorismo”. Y advirtió: “En el caso en que la OMS hesite, los Estados Unidos continuarán buscando la liberalización comercial, procurando alternativas regionales y de país a país. Ya estamos empeñados en negociaciones regionales, como el ALCA” (*Folha de São Paulo*, 11/11/2001). Sin embargo, América Latina tiene una larga y penosa experiencia del modo como Estados Unidos concibe e implementa la relación íntima entre seguridad y economía. Resta saber cómo y hasta dónde la promoverá en estos tiempos de “guerra infinita”, cuando se asiste a la clausura inequívoca de la fase abierta en el comienzo de los años noventa, que prometía eufóricamente el “círculo virtuoso” entre las políticas económicas neoliberales, la democracia política y los derechos humanos. Al final, el Plan Colombia está ahí, y los últimos acontecimientos de Venezuela y Argentina no dan lugar a dudas sobre el sentido de los discursos, actitudes y comportamientos del gobierno de Bush y de las agencias económicas multilaterales (el FMI, en particular): en cuanto que en la primera lo que se premia es el golpismo (y hasta se lamenta su fracaso), en la segunda se castiga a una democracia política cada vez más frágil y desacreditada.

Por todo lo dicho parece necesario destacar que en el período post-11 de septiembre el movimiento social global se confronta con el momento más crítico de su vertiginosa existencia. Entre tanto, como se procuró demostrar, es precisamente el contexto general de involución política el que torna la presencia de ese sujeto colectivo plural de transformación, además de posible (en función de las contradicciones reales y de las perspectivas contrahegemónicas que permiten desenvolver los ambivalentes procesos de globalización económica, política y cultural en curso), más necesaria y urgente que nunca. Una presencia, por otro lado, que no desapareció ni en los peores momentos, cuando su acción podría haber sido asimilada al terrorismo. Después de la parálisis y de la perplejidad inicial, el movimiento fue recuperando, paso a paso, la iniciativa y la capacidad de movilización (numerosas manifestaciones por la paz y contra la guerra en ciudades europeas, la protesta de Bruselas en ocasión de la reunión de cúpula de la Unión Europea, etc.) hasta alcanzar, con el II FSM de Porto Alegre, el punto de inflexión que marca la posibilidad real de retomar la expansión social, sectorial y geográfica, interrumpida por los atentados terroristas. El simple hecho de haber conseguido reunir cerca de 50 mil personas (15 mil delegados provenientes de 131 países, representando más de 4 mil organizaciones) con el objetivo de contestar el (des)orden mundial actual, revela el éxito y el significado mayor del acontecimiento: quebrar el miedo y la inhibición, y recuperar la iniciativa de debate y lucha, en un nivel más elevado de convergencia y coordinación de acciones futuras. No es un detalle menor que, entre las delegaciones y las organizaciones más numerosas, se hayan destacado –después del macizo contingente brasilero–, en orden decreciente, la italiana, la argentina, la francesa, la uruguaya y la norteamericana. Por lo menos tres de ellas tenían una significación especial, en virtud de la íntima conexión de las respectivas situaciones nacionales con el contexto glo-

bal: la italiana y los desdoblamientos movilizantes de Génova; la Argentina y el colapso paradigmático del modelo neoliberal, junto a experiencias incipientes de autoorganización social alternativa; y, finalmente, la norteamericana, en abierto contraste con la marea patriótica y belicista post-atentados. En términos de representación geográfica, se constataron importantes avances con relación al año anterior, pero aún es pronunciado el déficit de participación proveniente de África, Asia, Europa del Norte y del Este, países árabes y musulmanes, e inclusive de la propia América Latina. A grosso modo, puede decirse que el II Foro Social Mundial de Porto Alegre conservó un perfil en que predominan América Latina y Europa del Sur. En términos de representación social y sectorial, tal vez los desequilibrios sean aún mayores. Otro indicador indiscutible del éxito del evento fue su visibilidad política, un hecho que resultó, en gran medida, del número elevado de periodistas inscriptos (2.400) y de la amplia cobertura que recibió de la prensa internacional, con excepción quizás de la de Estados Unidos. De ese modo, a diferencia del I FSM, no sería exagerado afirmar que se ganó la batalla mediática con el Foro Económico Mundial de Davos, reunido en Nueva York. Pero el indicador más importante se encuentra, sin duda alguna, en la multiplicidad y diversidad de actividades formales e informales (conferencias, seminarios, oficinas, manifestaciones, foros especiales, programación cultural) realizadas con un espíritu que combinaba dimensiones deliberativas, festivas y de expresión de identidades, y el sentimiento generalizado de participar de un acontecimiento político de significación y alcance mundial.

Tal como fue destacado en el comienzo de estas notas, sería una tarea imposible –en función de la inmediatez, del gigantismo y de la propia naturaleza del Foro– esbozar un análisis y un balance general más ponderado de las actividades realizadas, sobre todo de aquellas orientadas hacia la reflexión crítica y hacia propuestas alternativas que constituyen la razón de ser del FSM. A pesar de que problemas de organización (exceso y superposición de temas y actividades, desniveles de las intervenciones y falta de debate real entre los expositores y de éstos con el auditorio en las conferencias y seminarios, problemas de traducción en numerosas oficinas, etc.) puedan haber afectado la dinámica y los resultados de los debates, queda la impresión de que en lo que respecta a las cuestiones de fondo que hacen parte de las preocupaciones y de la agenda del movimiento social, si bien fueron en mayor o menor medida abordadas, muy poco se avanzó en términos de contenido de las discusiones y de coherencia de proposiciones concretas en dirección de ejes comunes. Lo cual no implica subestimar hechos tales como la Declaración de los Movimientos Sociales, la decisión acertada de descentralizar la preparación del encuentro de 2003 a través de foros continentales y regionales, o las vigorosas polémicas suscitadas a propósito de la naturaleza imperialista o imperial del orden mundial y del destino de las instituciones multilaterales.

A guisa de conclusión, tres breves comentarios sobre algunas cuestiones cruciales que permanecen abiertas y que constituyen el núcleo de los dilemas y de-

safíos, hacia “adentro” y hacia “afuera”, que el “movimiento de movimientos” enfrenta en estos tiempos sombríos.

En el contexto de agravamiento represivo y controlador del escenario internacional post-11 de septiembre, que acentúa los riesgos de fragmentación y división interna (y el riesgo mayor tal vez sea el de marginar los componentes más radicalizados del movimiento y, en contrapartida, reforzar los más moderados), la tarea primordial es asegurar la unidad estratégica del movimiento. Tal unidad sólo puede ser mantenida con esfuerzos continuados de coordinación, alimentados constantemente, por un lado, por los grandes principios de convergencia y aglutinación (condensados en el rechazo a la mercantilización del mundo y en la búsqueda de la democratización radical del poder en el espacio global); y, por el otro, por campañas articuladas en torno de movilizaciones con objetivos políticos amplios o puntuales claros y una fuerte inserción social y geográfica, combinando diversas formas de acción (protestas de calle, acción directa no violenta, foros de debate de contenido y de proposiciones), bajo la dinámica de la heterogeneidad irreductible del movimiento. En razón de la propia naturaleza de este sujeto de transformación global cuya pluralidad constitutiva es su fuerza pero también su debilidad, pretender alcanzar un consenso pleno en torno de un proyecto determinado y de las premisas político-ideológicas que lo sustenten, como también de un conjunto absolutamente coherente de proposiciones programáticas o una forma privilegiada o única de movilización, es una ilusión, y una ilusión indeseable. De ahí que el ejercicio constante del debate “entre diferentes” (en el plano de las identidades, visiones, intereses, estrategias, etc.) pase a ser una condición *sine qua non* de la existencia dinámica del movimiento.

La redefinición de la agenda del movimiento fue impuesta por el drástico cambio del escenario internacional, el cual resignificó de manera dramática los problemas ya serios de criminalización y escalada represiva existentes en la fase final anterior al 11 de septiembre, y puso en primer plano las preocupaciones con la seguridad y la paz en el mundo, junto con la defensa de los derechos humanos en una perspectiva multicultural, de las libertades democráticas y de la propia democracia. Cuestiones fundamentales que abren nuevos y urgentes campos de intervención, sin que aquellas que estaban en el origen del movimiento contra la globalización económica neoliberal hayan perdido o visto disminuir su relevancia crucial. Es precisamente en el terreno del entrelazamiento complejo entre el dispositivo de seguridad global impulsado por el unilateralismo imperial de Estados Unidos y las estructuras de gobernanza, fuerzas y mecanismos del capitalismo globalizado neoliberal, que en un futuro próximo será realmente testada la capacidad efectiva de contestación y transformación del movimiento contrahegemónico.

La búsqueda de la expansión social, sectorial y geográfica del movimiento plantea serios desafíos, pues hace surgir o actualiza constantes clivajes o tensiones entre niveles diferentes de acción (local, nacional, regional y global) y entre

identidades, intereses y objetivos particulares y universales o globales de sus diversos componentes (ONGs, movimientos sociales, redes de acción ciudadana, colectivos sociales y políticos, etc.). Sin negar que ellos existen, y que falta aún mucho por hacer en materia de interconexiones y convergencias, es siempre útil enfatizar las interrelaciones positivas que ocurren en numerosas experiencias. Así, en relación con los niveles de acción, las movilizaciones transnacionales anti cumbre, o las dos ediciones FSM de Porto Alegre, han funcionado en general (con excepción tal vez de Praga) como poderosos estímulos para el fortalecimiento o la simple formación de comités de apoyo y redes de todo tipo, locales y nacionales, además de ser la ciudad-sede del evento la que aporta la mayoría de los manifestantes o participantes. La decisión de instalar foros regionales preparatorios para el próximo FSM de 2003 se inscribe, justamente, en esa lógica de ganar densidad y enraizarse en una base social amplia, con recortes geográficos y temáticos que permitan debatir mejor las especificidades y las mediaciones entre lo global, lo regional supraestatal, lo nacional y lo local. Y esto se vincula íntimamente con la expansión sectorial (que incluye, entre otras cuestiones delicadas, la problemática relación con el movimiento sindical), en la medida en que se consiga hacer consciente, a través de un trabajo pedagógico-cívico, que “la lucha contra la globalización no es una batalla abstracta sino que las políticas que se deciden en las instituciones internacionales determinan nuestras condiciones de vida y de trabajo” (Antentas, 2002).

Bibliografía

- Aguiton, Christophe (2001a) *Le monde nous appartient* (Paris: Plon).
- _____(2001b) “Les mouvements de lutte contre la mondialisation libérale après le 11 septembre 2001”, en *InfoAttac* (Montreal) N° 268, 25 de Agosto.
- Antentas, José María (2002) “Perspectivas del movimiento global de la sociedad civil”, en *Documento de debate para a Mesa do Observatório Social da América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Beck, Ulrich (2001) “El fin del neoliberalismo”, en *El País* (Madrid), 16 de Noviembre.
- Bensaïd, Daniel y Pelletier, Willy (2001) “Dieu, que ces guerres sont saintes!”, en *Le Monde* (Paris), 30 de Noviembre.
- Cassen, Bernard y Clairmont, Frédéric (2001) “Globalisation à marche forcée”, en *Le Monde Diplomatique* (Paris), Diciembre.
- Ceceña, Ana Esther (2002) “La batalla de Afganistán”, en Ceceña, Ana Esther y Sader, Emir (coords.) *La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial* (Buenos Aires: CLACSO).
- Cepik, Marco (2001) “Contra-terrorismo como guerra de coalizão: riscos sistêmicos”, en *Conjuntura Política* (Belo Horizonte) Vol. 23, Edição Especial, Septiembre.
- Chavagneux, Christian (2002) “Porto Alegre II, l’autre mondialisation”, en *Alternatives Économiques* (Paris) N° 199.
- Cox, Robert W. (1999) “Civil Society at the Turn of the Millenium. Prospects for an alternative world order”, en *Review of International Studies* (Cambridge: Cambridge University Press) Vol 26, N° 25.
- Della Porta, Donatella y Tarrow, Sidney (2001) “Après Gênes et New York: le mouvement antimondialisation, la police et le terrorisme”, en *InfoAttac* (Montreal) N° 288, 5 de Diciembre.
- De Sousa Santos, Boaventura (2000) “Por uma concepção multicultural dos direitos humano”, en *Contexto Internacional* (Rio de Janeiro: Instituto de Relações Internacionais, PUC-Rio) Vol. 22, N° 2.
- Edwards, Michael y Gaventa, John (2001) *Global Citizen Action* (Boulder: Lynne Rienner).
- Fisk, Robert (2001) “Bush se encamina a una trampa”, en *The Independent* (reproducido no InfoAttac, Montreal N° 108, 10 de Octubre).
- Frémeaux, Philippe (2001) “Le nouvel interventionisme libéral”, en *Alternatives Économiques* (Paris) N° 197, Noviembre.
- George, Susan (2001) “L’Ordre libéral et ses basses oeuvres”, en *Le Monde Diplomatique* (Paris) Agosto.
- Giddens, Anthony y Dahrendorf, Ralf (2001) “Recuperaremos los valores de Occidente”, en *El País* (Madrid), 18 de Octubre.

- Gómez, José María (2000) *Política e democracia em tempos de globalização* (Petrópolis: Vozes).
- _____(2001) “Ativismo transnacional e globalização contra-hegemônica. Seattle, Porto Alegre e depois”, en *Praia Vermelha* (Río de Janeiro) Vol.5, Nº 4.
- _____(2002) “Entre dos fuegos. El terrorismo, la guerra y los desafíos del movimiento social global contrahegemónico”, en Ceceña, Ana Esther y Sader, Emir (coords) *La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial* (Buenos Aires: CLACSO).
- Hardt, Michael y Negri, Antonio (2000) *Empire* (Paris: Exils Éditeur).
- Held, David y McGrew, Anthony (2000) *Prós e contras da globalização* (Rio de Janeiro: Jorge Zahar).
- Held, David y Kaldor, Mary (2001) “Aprender de las lecciones del pasado”, en *El País* (Madrid), 8 de Octubre.
- Ignatieff, Michael (2001) “El problema de las guerras por delegación”, en *El País* (Madrid), 16 de Noviembre.
- Kahlfa, Pierre (2002) “Après le 11 septembre et Porto Alegre, où en est le mouvement de lutte contre la mondialisation libérale?”, en <www.worldsocialforum.org>.
- Kissinger, Henry (2002) “Un nuevo equilibrio internacional”, en *Clarín* (Buenos Aires), 9 de Enero.
- Mittelman, James H. (2000) *The Globalization Syndrome. Transformation and Resistance* (Princeton: Princeton University Press).
- O’Brien, Robert; Goetz, Anne Marie; Scholte, Jan Aart y Williams, Marc (2000) *Contesting Global Governance. Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Petrella, Ricardo (2001) “Criminaliser la contestation”, en *Le Monde Diplomatique*, Agosto.
- Rouleau, Eric (2001) “Visages changeants de l’Islam politique”, *Le Monde Diplomatique*, Noviembre.
- Scholte, Jan Aart (2000) *Globalization. A critical Introduction* (London, Macmillan).
- Scholte, Jan Aart (2001) “Civil Society and Democracy in Global Governance”, en *GSGR Working Paper* (Coventry) Vol. 1, Nº 65.
- Seoane, José y Taddei, Emilio (2001) *Resistencias mundiales (de Seattle a Porto Alegre)* (Buenos Aires: CLACSO).
- Stiglitz, Joseph E. (2002) *El malestar en la globalización* (Buenos Aires: Taurus).
- Touraine, Alain (2001) “Aujourd’hui et demain”, en *Le Monde* (Paris), 28 de Noviembre.